LA REPRESIÓN DE GUERRA Y POSGUERRA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

MIGUEL ORS MONTENEGRO

1. *UN FEO ASUNTO Y DE MUY MAL GUSTO*

Con toda razón escribió Julio Aróstegui que la Guerra Civil es uno de los puntos calientes de nuestra historiografía. Más aún, la cuestión de las represiones posiblemente sea la que mayor controversia suscita, hasta el punto de ser uno de los escasos asuntos históricos que consigue acalorar a muchos ciudadanos de nuestro país, sobre todo a aquellos que, por razones de edad, más deberían cuidar no caer en estados de excitación. El medio siglo transcurrido nos parece que debe ser tiempo suficiente para abordar el tema desde la reflexión y no a la manera de arma arrojadiza como ha venido siendo costumbre.

El buen número de jóvenes historiadores que nos hemos metido en esta suerte de historia funeraria nos vemos casi en la tesitura de defendernos de nuestro presunto mal gusto y algún alma bendita habrá que vea en la elección del tema un manifiesto deseo de incordiar u otras malévolas intenciones. En el fondo, no es sino la malsana intención de hacer la historia lo menos contemporánea posible. Para muchos, 50 años siguen siendo poco tiempo para sacar los trapos a relucir. En este sentido, las leyes que impiden la consulta de documentación de nuestro tiempo se complementa con las posiciones más conservadoras.

Por otra parte, la historia no ha frecuentado la descripción y, sobre todo, la interpretación de la mayoría de las barbaries, y la que provocó el golpe de estado del 18 de julio de 1936 no ha sido la excepción. Así, poco se sabe del terror que acompañó a la Revolución Francesa —precisamente el único antecedente con el que se ha relacionado la represión en zona republicana en la guerra civil española—, de los terrores blanco y rojo de la Revolución Rusa, del terror nazi —aún con toda la literatura existente— y, todavía menos, de las cañerías mas recientes cometidas en dictaduras de América Latina o en Extremo Oriente (Camboya, Vietnam...) Y, desde luego, tal ausencia se ha debido más a las dificultades de la investigación que a la falta de interés de los historiadores.

Una de las pocas excepciones en este panorama de persecuciones relegadas a la impunidad y al anonimato, lo constituye el informe Sábato sobre

la represión del régimen militar argentino. Su inmediatez ha permitido no sólo una urgente y necesaria lección de historia sino la posibilidad de perseguir, y ¡qué menos!, encarcelar e inhabilitar a torturadores y acompañantes. Que, al final, la democracia argentina se haya quedado más con lo primero que con lo segundo no deja de ser una segunda lección. En nuestro caso, nuestros criminales de guerra y de posguerra supervivientes se podrán morir con la tranquilidad de que ni la justicia ni, tan siquiera, la historia les va a poner en aprietos con requisitoria o citación alguna. A todos los que nos dedicamos a estos temas nos sería fácil dar nombres de cafres de uno y otro lado. La mayoría renunciamos a ello porque bastante trabajo tienen ya sus hijos con serlo. No dejaría de ser otra forma de tortura añadida. Pero, al menos, permítasenos pensar sobre todo aquello.

Por último, nos parece que este país ha reflexionado poco sobre la violencia, a pesar de nuestra modesta aportación pasada y presente al respecto. Santiago Genovés, en un muy recomendable estudio sobre la violencia en el País Vasco (1) contaba que cada año se escriben en el mundo de dos a tres mil libros sobre violencia. Desde España colaboramos poco. Por poner el ejemplo más fácil, sobre ETA, al margen de la «reflexión» policial, parecería que se ocupan del tema los mismos de siempre: Savater, Muguerza, Linz y no muchos más. Tampoco está de más recordar el enorme brote de violencia política que siguió a la muerte de Franco. Entonces fuimos testigos de la actitud de provocación, terror y escenografía paramilitar de la extrema derecha, muy similar a la de Falange en el segundo bienio republicano. La diferencia más significativa entre estos años y los meses anteriores al golpe del 18 de julio de 1936 fue que las organizaciones mayoritarias de la izquierda no contestaron a tales provocaciones. Así, no hubo respuesta violenta a la matanza de Atocha ni a ningún otro de los numerosos asesinatos cometidos. La respuesta se dió en las urnas y éstas desarmaron a quienes hoy, felizmente, están en sus casas quejándose de lo mal que anda el país y de que ya no se puede salir a la calle.

2. FUENTES Y METODOLOGÍA

2.1. *La represión de guerra*

Respecto a la represión de guerra en la España republicana, el régimen de Franco encargó pronto —decreto del Ministerio de Justicia de 26 de abril

(1) Genovés, Santiago: *La violencia en el País Vasco y en sus relaciones con España*, Barcelona, 1986.

de 1940—, con la llamada Causa General, una exhaustiva investigación en cada provincia sobre la «dominación roja». Fiscalías provinciales, Diputaciones, Guardia Civil, Falange, particulares y, sobre todo, Ayuntamientos contribuyeron con sus informes. La intención esencialmente propagandística de tal investigación —las cafrerías cometidas dentro del bando vencido servían como justificación del golpe de estado, de la guerra y del posterior «ajusticiamiento»—, se vió, no obstante, frustrada al obtenerse una cifra total de represaliados en zona republicana muy inferior a la prevista: 85.940 víctimas, cifra que, por lo demás, fue notoriamente inflada, como tendremos ocasión de comprobar con el informe de la provincia de Alicante. De manera que la investigación sirvió para crear un voluminoso archivo —utilizado hasta el final de la dictadura, entre otras cosas, para permitir o no el regreso de exiliados políticos— y un libro (2), hoy por fortuna agotado. Es difícil encontrar una obra más lúgubre y macabra, incluyendo fotografías de cadáveres exhumados y multitud de acusaciones poco o nada fundamentadas.

De las 11 piezas o partes en que se divide la Causa General (3), la más importante para el estudio de víctimas es la pieza 1.^a o principal, elaborada en cada municipio por su Ayuntamiento, en base a tres informes o «estados» (4). En la provincia de Alicante, por ejemplo, los informes recogidos por los Ayuntamientos de los 140 municipios, en los meses finales de 1940, son de todos los colores y calidades. No todos responden de forma completa el triple cuestionario (sobre todo se deja sin contestar el estado 2, es decir, el de las víctimas no residentes en el municipio pero que aparecieron muertas en él o el apartado de «sospechosos» de participar en asesinatos u otros delitos). Al margen del rigor, sí se aprecia en cambio una manifiesta tendencia a apuntar el máximo número de víctimas en cada municipio. Es muy frecuente la repetición de nombres que aparecen citados como residentes en varios sitios a la vez o la inclusión de personas cuyas muertes tuvieron lugar en los frentes con poca o ninguna probabilidad de que fueran efectivamente represaliadas. Y

(2) *La dominación roja en España, Causa General*. Publicaciones españolas, Madrid, 1953.

(3) *Sánchez Recio, Glicerio y Santacreu, José Miguel*: «La Causa General, fuente para el estudio de la rebelión y la guerra civil», *Arbor*, número 491-492, Madrid, 1986.

(4) Los Ayuntamientos redactaron sus informes para la Causa General en base a 3 «estados»: «Relación de personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinados» (estado 1); «Relación de cadáveres recogidos en este término municipal, de personas no reconocidas como residentes en él, que sufrieron muerte violenta durante la dominación roja». (estado 2); «Relación de tormentos, torturas, incendios de edificios, saqueos, destrucciones de iglesias y objetos de culto, orfanaciones y otros hechos delictivos que por sus circunstancias, por la alarma o el terror que produjeron deban considerarse como graves, con exclusión de los asesinatos, que fueron cometidos en este término municipal durante la dominación roja (estado 3).

no faltan los casos pintorescos: el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig apuntó como única víctima de guerra a un enajenado mental que desapareció del pueblo sin más.

En cualquier caso, resulta obvio que los Ayuntamientos contaron con todos los medios a su alcance y, en consecuencia, no cabe pensar en omisiones sino en todo lo contrario: nuestro trabajo, pues se centra en distinguir entre víctimas reales e imaginarias y eliminar las repeticiones. Si lo primero es prácticamente imposible, salvo lo que pueda obtenerse de la Historia Oral, lo segundo cuenta con el problema de que, en ocasiones, las mismas víctimas aparecen citadas con errores en la filiación. Así, en la provincia de Alicante el conjunto de los informes proporciona una cifra total de 1558 víctimas y una vez descontados los que se citan en dos ocasiones resultan 1033 personas. De manera que 525 víctimas se sumaron dos veces y es fácil suponer que algo parecido ocurriría en cada uno de los informes provinciales de la Causa General.

Al margen de la pieza principal (5), la Causa General contiene 10 piezas más dedicadas a los siguientes aspectos: Alzamiento nacional; cárceles y sacas; chekas; justicia roja; prensa; autoridades locales; delitos contra la propiedad; banca; persecución religiosa y tesoro artístico y cultura roja. A ellos nos referimos en nuestro balance de la represión en la provincia.

La Causa General, con las observaciones apuntadas, reemplaza otras fuentes como los Registros Civiles o los libros de Registro de los cementerios. Respecto a los Registros, es fácil que familiares de fallecidos en los frentes trataran de inscribirlos como víctimas de represalias y no por acciones de guerra. Y sobre las listas de caídos de cementerios e iglesias, mejor no hacer mucho caso (6).

Como la investigación sobre la represión no termina con el recuento de víctimas, es necesario acudir a otras fuentes. Sin duda, una de las más importantes es la prensa escrita —sin olvidar el medio de comunicación por excelencia de la guerra: la radio, si bien sus archivos sonoros o escritos son excepcionales y nada hemos encontrado en la provincia, en Radio Alicante o Radio Elche—. La prensa de mayor interés es, lógicamente, la que coincide con la represión, es decir de agosto a diciembre de 1936 (7). La lectura de

(5) *Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección «Causa General», legs. 1395 y 1396.*

(6) Por ejemplo, en la lápida del cementerio municipal de Elche que contenía la relación de caídos por Dios y por España figuraba un familiar del autor de este trabajo que falleció en 1950 a causa de tuberculosis.

(7) La prensa a tener en cuenta en el tema de la represión es, fundamentalmente, la diaria: «El Luchador», «El Día» y «Diario de Alicante», este último denominado «Bandera Roja» a partir

la prensa diaria, por ejemplo «*El Día*» o «*El Luchador*», ambos republicanos de izquierda, permite contemplar la cuestión de manera similar: destaca sobremanera el silencio permanente frente a los asesinatos cometidos en la provincia. Sólo en una ocasión —12 de agosto de 1936— «*El Día*» recoge el hallazgo de 4 cadáveres en Guardamar y Elche. Desde esa fecha, no volvería a repetir informaciones semejantes, con toda probabilidad por recomendación de la censura impuesta desde el Gobierno Civil. No se da publicidad de la represión ilegal pero sí, en cambio, se mantiene una constante campaña para erradicarla. Tal campaña comenzó incluso antes de que los «paseos» se hicieran frecuentes (a partir de la segunda quincena de agosto). La prensa refleja los esfuerzos —nunca reconocidos en los trabajos sobre la guerra en la provincia— del gobernador civil Francisco Valdés Casas en este sentido (8).

A través de la prensa diaria se puede seguir igualmente con profusión de detalles la actividad de los Tribunales Populares. Las crónicas de los juicios incluyen desde las declaraciones de acusados y testigos hasta las sentencias completas. La publicidad dada a los tribunales populares necesariamente tuvo que influir en el descenso de la represión ilegal.

Al margen de estas dos fuentes esenciales —Causa General y prensa—, un archivo de enorme interés nunca investigado hasta hoy es el de la Cárcel Provincial (actualmente en Fontcalent). En él se conservan los expedientes carcelarios de todos aquellos que a lo largo de los tres años de guerra pasaron por esta cárcel. Aunque, a diferencia de la documentación de posguerra, sólo se conservan los legajos de la cárcel de la capital, ésta prácticamente concentró gran parte de los condenados a penas de cárcel, junto al campo de concentración de Albatera. Aunque muchos presos fueron trasladados bien al campo de concentración de Albatera, bien a Orihuela u otros lugares, al menos queda la referencia del paso por Alicante y del traslado. En lo que respecta al campo de concentración de Albatera, la documentación que hemos podido consultar (en el Ayuntamiento de la propia ciudad y, sobre todo, en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca) permite conocer una relación

del 8 de diciembre de 1936. El buen número de semanarios que las organizaciones obreras fueron publicando en la provincia son posteriores a los meses en los que tiene lugar tanto la represión legal -condenas a muerte de los tribunales populares- e ilegal -paseos y sacas. Entre los escasos semanarios que hacen referencias al tema destaca el semanario socialista ilicitano «*El Obrero*» o «*Gaceta de Levante*» de Alcoy. Sobre prensa puede consultarse el catálogo dirigido por Ricard Blasco, *La prensa del País Valencià 1790-1983*, vol. 1, Valencia 1983.

(8) En este sentido, es curioso constatar como un trabajo basado esencialmente en prensa como el de Vicente Ramos no haga prácticamente mención a los esfuerzos del periódico «*El Día*» por evitar todo tipo de desmanes.

completa de presos e, incluso, un proyecto de renovación y mejoras del campo presentado por la dirección del mismo (9).

En el Archivo Histórico Nacional de Salamanca hemos encontrado una documentación escasa y dispersa en lo que a la represión de guerra se refiere. Los documentos de mayor interés son las actas del Frente Popular Antifascista de Alicante, relaciones —incompletas— de desafectos de algunos municipios de la provincia y documentación judicial diversa (10). Igualmente, la Fundación Pablo Iglesias de Madrid conserva la correspondencia de las Agrupaciones socialistas de la provincia con algunos informes aislados (11). Un archivo prácticamente desaparecido es el del Gobierno civil de la provincia. Salvo algún libro de registro de entrada y salida de correspondencia (12). Respecto a archivos municipales, ofrecen mayor interés los legajos de correspondencia de los primeros meses de guerra que las Actas de las reuniones de los Consejos Municipales (13). En éstas, las alusiones al tema prácticamente son inexistentes. Otra fuente más de consulta ineludible es el Boletín Oficial de la provincia y el Boletín Oficial del Estado.

Por último, las limitaciones documentales obligan, al abordar el estudio de la represión de guerra, a buscar en la Historia Oral el complemento de la investigación. A diferencia de los represaliados de posguerra a los que se accede con mayor facilidad, los testimonios de personas que se vieron o se sintieron perseguidas en territorio leal a la República son difíciles de conseguir. Conscientes de ello, hemos intentado recoger más experiencias de este

(9) Sobre el campo de concentración de Albaterra tan sólo hemos encontrado documentación en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca (una memoria anual con fecha 31-XII-1937 y una relación nominal de 932 presos de marzo de 1938) y en el propio Ayuntamiento de Albaterra, algunos expedientes de presos de guerra. Por el contrario, nada queda sobre el campo a partir del 1 de abril de 1939.

(10) *Archivo Histórico Nacional de Salamanca, sección Guerra Civil*. Existe un catálogo publicado por el Instituto de Estudios Juan Gil Albert: *María Teresa Díez de los Ríos y otros, Documentación sobre la guerra civil en Alicante*, Alicante, 1984.

(11) Fundamentalmente, la Fundación Pablo Iglesias conserva la correspondencia entre las Agrupaciones Socialistas y la Federación Provincial Socialista o entre ésta y el Comité Ejecutivo del partido. Respecto a la represión, hemos encontrado muy pocas referencias al año 1936, al margen de unos informes sobre los sucesos de Aspe, en el que fueron linchadas dos personas. Es más amplia para los años 1937 y siguientes e, incluso para los primeros días del exilio.

(12) Aunque buena parte de los fondos del Gobierno Civil se encuentran ya en el Archivo Histórico Provincial, sería necesario catalogar los fondos todavía depositados en el Gobierno Civil, en gran parte relacionados con el Franquismo. Queremos agradecer al secretario general del Gobierno Civil, señor Sendra, las facilidades que nos dio para la consulta de la documentación.

(13) Dicho sea de paso, el acceso a los archivos municipales de la provincia, sobre todo en pequeños municipios es de lo más agradecido. Por ejemplo, este verano último (1987) no pude entrar a los archivos de Denia (por muerte del archivero), Pego (archivo desinfectándose), Crevillente (no se encarga nadie del asunto), etc.

lado y aquí es donde mayores problemas han surgido: desde simples negativas, entrevistas bajo condición de no ser publicadas, rechazo de grabación etc. Aunque en ocasiones se requiera ejercer de alcoyano, la importancia de estos testimonios nos obliga a seguir intentándolo. A veces, una sola entrevista permite clarificar lo que sucedió en una ciudad en mayor medida a lo que toda la documentación habida y por haber puede dar de sí (14).

2.2. Fuentes para la represión de posguerra

La investigación de la represión de posguerra tropieza hoy, todavía, con la imposibilidad de acceder a su más importante fuente de estudio: las auditorías militares. Aunque, a través de otros caminos, puede llegarse a la relación de fusilados, presos o reclamados por los tribunales militares, seguimos sin poder estudiar los procedimientos judiciales y, consiguientemente, los criterios utilizados por los tribunales militares. Desde la Universidad de Alicante, un equipo de investigadores solicitamos el acceso a esta fuente y la negativa fue inmediata (15). Y lo peor del caso no es que la investigación se retrase por este motivo: nos preguntamos si cuando llegue el acceso a esta fuente quedará algún papel por ver. Al menos, queremos dejar constancia de lo que nos parece una pifia descomunal del gobierno del PSOE desde el punto de vista de la recuperación de nuestro patrimonio documental. Los esfuerzos indudables por devolver a nuestro país archivos documentales que la guerra obligó a sacar fuera de España resaltan frente a esta curiosa dejadez. La sorpresa es mayor si se piensa en que el partido actualmente en el poder cuenta con excelentes investigadores conocedores de estas anomalías(16).

Al margen, pues, de la que tendría que ser primera documentación a consultar, son numerosas las fuentes con las que trabajar. En primer lugar, y para la represión relacionada con ejecuciones, es necesario acudir a los Registros Civiles y a los Registros de Cementerios. En la provincia de Alicante, la represión comienza una vez la guerra ha terminado y ello permite que no se

(14) Para la represión, testimonios de enorme interés suelen ser los de los funcionarios judiciales veteranos o jubilados. Igualmente, nos está siendo de gran interés la colaboración de los sindicatos y partidos de izquierda. Respecto a Falange, si ya es difícil dar con militantes de primera hora, peor está lo de entrevistarles (ser hijo de un camarada no nos está sirviendo de mucho).

(15) Ni tan siquiera el respaldo de la Universidad de Alicante nos sirvió de nada. Con fecha 1 de diciembre de 1986 se nos negó el acceso por parte del capitán general de la región militar de Levante a un equipo formado por Los profesores Glicerio Sánchez Recio, José Miguel Santacreu y el autor de este trabajo. Eso sí, pudimos interponer recurso de alzada ante el Ministerio de Defensa, que es lo que algunos historiadores de mucho espíritu están haciendo.

(16) Viñas, Ángel: «La historia de la contemporaneidad española y el acceso a los archivos del franquismo», *Sistema*, mayo de 1987, número 78.

repita la situación descrita, sobre todo, en Andalucía, donde las relaciones completas de fusilados hay que buscarlas en registros de cementerios y no en los Registros Civiles (17). No obstante, hemos comprobado 60 casos de personas fusiladas en Alicante capital que no fueron inscritas en su Registro Civil y sí, en cambio, aparecen mencionadas como fusilados en el libro de Registro del Cementerio Municipal. La mayoría de éstos corresponden a las primeras semanas posteriores al 1 de abril de 1939 (1 en abril y 36 en mayo). El Registro Civil resulta, por tanto, insuficiente. En unos casos se inscribe dos veces la misma persona y en otros se quedan sin consignar. Tampoco es descartable que se citen algunos ejecutados con apellidos diferentes en ambos registros. En cualquier caso, los resultados que hemos obtenido en Alicante capital durante el período 1939-1945 son los siguientes:

- Fusilados según Registro Civil537
- Fusilados inscritos en el Cementerio y no registrados60

Cabe la posibilidad de que de estos 597 pueda darse algún caso aislado de repetición, pero hemos eliminado tanto los consignados dos veces en el Registro Civil como tampoco hemos anotado los que en el libro de Registros del Cementerio aparecían como «fusilados» sin más datos, para evitar la posible duplicidad con la relación obtenida en el Registro Civil. Por todo ello, la cifra de 597 ejecutados en Alicante capital entre 1939 y 1945 nos parece que puede tomarse como la más aproximada posible.

Fuera de la capital, el resto de la provincia no ofrece problemas a la hora del recuento de ejecuciones y los Registros Civiles son, creemos, enteramente fiables. Entre otras razones porque el número de fusilados se reduce considerablemente (49 en Denia, 18 en Orihuela, 17 en Alcoy, 15 en Elche...). Por otra parte, tales ejecuciones tienen lugar a partir del verano de 1939 con lo que los Registros Civiles funcionarían con normalidad. El único problema lo constituyen las pérdidas de libros de Registros Civiles —Novelda— o de libros de registro de Cementerios —Albatera— (18).

Al igual que para la represión de guerra, el archivo de la prisión provincial constituye una fuente esencial para conocer el montante global de la re-

(17) Así lo han demostrado los trabajos de Ian Gibson sobre la represión en Granada o los de Francisco Moreno Gómez sobre Córdoba.

(18) Después de recorrer los Registros Civiles de todos los partidos judiciales de la provincia, no se nos ha puesto casi ninguna pega en todos ellos, al margen de tener que convencer a algún juez sobre la oportunidad del trabajo que estamos realizando. Mucho más complicado es el acceso a los libros de registro de los cementerios, al exigirse en muchos casos el correspondiente permiso del concejal encargado. Al menos, no tuvimos problemas en consultar el de mayor interés: Alicante capital.

presión en la provincia. Allí se conservan los expedientes carcelarios no sólo del Reformatorio de Adultos de la capital sino del conjunto de cárceles de partido de la provincia. Tan sólo hemos notado la ausencia de documentación referente a campos de concentración —Albatera o «España» de Denia—. Los expedientes no contienen una información uniforme —en ocasiones no consta la condena impuesta— y el frecuente traslado de presos fuera de la provincia impide conocer el cumplimiento real de las condenas impuestas, pero, en cualquier caso, su consulta es imprescindible para hacerse una idea del coste social de la derrota en la provincia (19).

Otra fuente esencial de investigación es el Boletín Oficial del Estado para la legislación represiva (20) y, sobre todo, el Boletín Oficial de la Provincia. De este último se obtiene información sobre los siguientes apartados:

1. Edictos y requisitorias de los Tribunales Militares de la Provincia.
2. Expediente incoados en virtud de la Ley de Responsabilidades políticas (9, II, 1939), expedientados que pagaron la sanción impuesta y modificación de las penas para insolventes por la modificación que sufrió la ley (19, II, 1942).
3. Ley de represión de la Masonería y el Comunismo (El BOP publica íntegras las sentencias tanto de los masones de la provincia como de aquellos que fueron condenados a cumplir aquí su pena de confinamiento).
4. Depuración del Magisterio y demás funcionarios.
5. Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo (fundamentalmente, los funcionarios que fueron repuestos en sus cargos después de la guerra y, en algún caso, los recursos de inhabilitados por el nuevo régimen).
6. Informes de notarías sobre devolución de empresas confiscadas en guerra a sus antiguos propietarios.
7. Requisitorias de prófugos y desertores en su mayoría exiliados.

(19) Con sorprendente rapidez obtuvimos el permiso del Ministerio de Justicia para acceder al archivo de la cárcel provincial, actualmente en Fontcalent. Su archivo, perfectamente organizado, guarda los expedientes personales de los encarcelados en Alicante capital durante la guerra, así como los expedientes de todas las cárceles de partido de posguerra y los legajos correspondientes a los «condenados a última pena». Sin duda, este archivo es esencial para conocer el montante global de ambas represiones con un centenar largo de legajos.

(20) Sobre legislación relacionada con la represión, puede verse: *Berdugo Gómez de la Torre*, I.: «Derecho represivo en España durante los períodos de guerra y posguerra (1936-1945). *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, 1980-3. Desde la Universidad de Alicante se ha contribuido al tema con la tesina del profesor *José María Asencio Mella*, *Los procedimientos antiterroristas en el «Nuevo Estado» (1939-1945)*. Memoria de licenciatura inédita, 1983, así como las investigaciones del profesor Glicerio Sánchez Recio.

La investigación se completa con el estudio de la prensa (21), del archivo del Gobierno Civil hoy todavía por catalogar y, naturalmente, con los testimonios de quienes, de una manera u otra, padecieron la represión. Respecto a la Historia Oral, hemos utilizado fundamentalmente a los sindicatos y partidos como medio de acceder a testimonios significativos. Al margen de la documentación personal que esta fuente permite recuperar, la Historia Oral es la única posibilidad de acceder a una parcela significativa, no por limitada numéricamente menos extendida, de la represión de posguerra: la que se realizó al margen de las leyes del nuevo régimen. Resulta obvio que la represión no estuvo sólo en manos de tribunales militares o civiles (22).

3. LA PROVINCIA DE ALICANTE

3.1. La represión de guerra y posguerra: historiografía

En primer lugar, nos referiremos brevemente a la escasa bibliografía referida a la provincia de Alicante. Y no deja de ser paradójico: con todo lo que se ha comentado la cuestión, bien poco se ha escrito. El primero fue Abelardo de Teruel con un artículo publicado en el *Almanaque de Las Provincias de 1940* (23). De su utilidad, sirva como muestra la mención del autor sobre los tribunales populares: «... lo que llamándose Tribunal no era otra cosa que una manada de lobos carnívoros influidos por el virus asqueroso de la fobia central (sic) vaciada en los más innobles instintos criminales...». En un tono menos apocalíptico pero sin desmerecer al pionero, el presbítero Gonzalo Vidal escribió, en 1951, un librito sobre la persecución religiosa en la provincia de Alicante (24). Lo más destacado sin duda es la dedicatoria al jefe del Estado («...Se puede perdonar, como cristianamente V.E. ha perdonado; pero lo que no se puede es olvidar aquellos hechos vandálicos y de terror...»), así como un capítulo preliminar titulado «El Racionalismo político de los siglos XVIII, XIX y XX», en el que el autor buscó las raíces de la persecución religiosa, ha-

(21) Hasta la aparición de *Información* en 1941, la prensa de posguerra de mayor interés es la siguiente: *Arriba España*, reconvertido sólo en *Arriba* desde el 1 de abril de 1939 y, sobre todo la *Hoja Oficial de Alicante*, para las primeras medidas adoptadas por la autoridad militar.

(22) La represión de carácter ilegal en la posguerra merecería una investigación monográfica en la provincia y sólo se puede hacer a través de la Historia Oral, por lo que es un tema «urgente», pese a que cuantitativamente fuera poco relevante al menos en lo referente a nuevas muertes.

(23) Abelardo de Teruel (?): «Alicante y su provincia bajo la dominación roja». *Almanaque de Las Provincias*, Valencia, 1940. (Biblioteca Gabriel Miró de Alicante).

(24) Vidal Tur, Gonzalo: *Persecución religiosa. Provincia de Alicante*, Alicante, 1951. (B.G.M.A.).

ciendo, como era de esperar, especial hincapié en las «sectas extranjeras». Tras las explicaciones, un largo inventario de asesinados —con profusión de errores— y de iglesias y objetos religiosos destruidos. Ni se citan fuentes, ni se ofrecen cifras globales.

Pasados veinte años más, Vicente Ramos publicó su monumental *Guerra civil en la provincia de Alicante* (25). Un millar de páginas con acopio de documentación y un ejemplo clamoroso de lo que, siguiendo a Jorge Lozano (26), podríamos llamar historiador anticuario. Ciertamente, tres tomos en los que se encuentra de todo, menos análisis, interpretaciones y conclusiones. La opinión de Julio Aróstegui sobre el envejecimiento de los clásicos de la Guerra Civil se refuerza sin duda con esta obra. Respecto a las represiones, Vicente Ramos se ocupa de ambas, recogiendo algunos datos equivocados —por ejemplo 300 represaliados de guerra en Alcoy cuando fueron 141—, pero, sobre todo, dejando de lado los esfuerzos que desde el gobierno civil de Alicante se hicieron para impedir la represión ilegal o los manifestos en contra de la violencia de retaguardia que aparecieron en los diarios alicantinos, por lo demás vaciados completamente por V. Ramos. También incurre en algún que otro lugar común de la propaganda franquista como en lo que se refiere a las chekas, la mayoría de dudosa existencia.

El primer libro sobre la represión de posguerra en Alicante lo publicó Enrique Cerdán Tato en 1978 (27) y es, junto a la obra de Vicente Ramos citada, el trabajo que mayor divulgación ha tenido por estas tierras. En lo que hace a la represión de los primeros años del Franquismo, Cerdán Tato utiliza casi exclusivamente fuentes orales tan necesarias para ofrecer una visión global de la represión como insuficientes para su cuantificación. Por citar un ejemplo, se menciona la cifra de 150 ejecuciones en la Marina Alta, cuando fueron 49. En cualquier caso, y frente al rechazo de Vicente Ramos respecto a los testimonios orales, la investigación llevada a cabo por Enrique Cerdán será de uso obligado para cualquier investigador del Franquismo en la provincia.

Uno de los últimos libros publicados hasta hoy relacionado con la represión de guerra y posguerra en la provincia es el de Rafael Coloma sobre el caso de Alcoy (28). Sus fuentes son la prensa fundamentalmente y los testimonios de familiares de las víctimas de guerra. En nuestro caso, nos ha sido de gran utilidad para corregir un incompleto informe realizado por el Ayunta-

(25) Ramos, Vicente: *La Guerra Civil en la provincia de Alicante*, Alicante 1973, 3 vols.

(26) Lozano, Jorge: *El discurso histórico*, Madrid, 1987.

(27) Cerdán Tato, Enrique: *La lucha por la democracia en Alicante*, Madrid, 1978.

(28) Coloma, Rafael: *Episodios alcoyanos de la Guerra de España, 1936-1939*, Alicante, 1980.

miento de Alcoy para la Causa General. Hay como mínimo dos cuestiones debatibles. Una, la profusión de chekas a las que se refiere el autor cuando, en realidad, más que cárceles secretas lo que hubo en Alcoy fueron varios edificios habilitados como prisiones y, otra, la acusación, sin ningún tipo de pruebas, al Comité Revolucionario de Defensa alcoyano de ser el inductor de los asesinatos. Respecto a la posguerra, Coloma como falangista de primera hora se refiere a la inexistencia de malos tratos en la ciudad con los detenidos, lo que no deja de ser un comentario muy optimista.

Ningún interés tienen dos libros más (29). El de Emilio Chipont es el clásico en el que se puede encontrar desde la cartelera de espectáculos a la cesta de la compra y el de José Alfonso Vidal en el que se describe en un tono cheli su paso como oficial de presiones en el campo de Albufera en un esfuerzo nada decoroso de presentarse como quintacolumnista.

Sería prolijo citar las referencias que se hacen a Alicante por los tratadistas de la guerra civil, en la medida en que todos ellos se refieren al menos por el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Citaremos sólo al historiador que mayor cantidad de cuentas ha realizado relacionadas con la guerra y la posguerra, el general Salas Larrazabal (30):

Provincia de Alicante.

- Ejecuciones y homicidios en zona gubernamental.....1571
- Ejecuciones y homicidios en zona nacional.....334

(*Pérdidas de la guerra*, páginas 362 y 371).

Según nuestros resultados, la represión de guerra en la provincia afectó a 1033 víctimas y la represión de posguerra se saldó con 735 fusilados. Diferencias notables, pues, pero similares por lo demás a las que en otros estudios regionales o provinciales se están obteniendo respecto a las ofrecidas por Salas Larrazabal.

Por último, cabe citar los trabajos del profesor Sánchez Recio sobre la represión de posguerra en el partido judicial de Monóvar, así como sus más recientes sobre el funcionamiento de los tribunales populares (31). El interés del primero estriba en el estudio de una documentación —la del tribunal mi-

(29) Chipont, Emilio: *Alicante 1936-1939*, Madrid, 1974; Alfonso Vidal, José: *Levante 1936: la increíble retaguardia*, Madrid, 1973.

(30) Salas Larrazabal, Ramón: *Pérdidas de la guerra*, Barcelona, 1977.

(31) Sánchez Recio, Glicerio: *Las responsabilidades políticas en la posguerra española*. El partido judicial de Monóvar, Alicante, 1984; «Los tribunales populares y su actuación durante la guerra civil en el País Valenciano», comunicación inédita presentada al *Congreso Historia y memoria de la Guerra Civil*, Salamanca, 1986.

liar de Monovar— a la que los historiadores aún no tenemos acceso y, respecto a los más recientes, constituyen la primera contribución al estudio de un tribunal popular.

3.2. *Un aspecto de la represión de guerra en la provincia: el «paseo»*

1. De la cifra total —1033 víctimas— que hemos obtenido a partir de los informes de los 140 municipios de la provincia incluidos en la Causa General, 958 muertes se producen en la retaguardia y 75 en los frentes. Entre las primeras, contamos 16 casos que deben considerarse al margen del resto de represaliados (las muertes en hospitales, cárceles o por suicidios). Respecto a los frentes, hay que distinguir entre las muertes que tienen lugar como consecuencia de intentar pasar al bando nacional —13 casos consignados que seguramente serían más—, frente a lo que fue represión pura y simplemente, que también la hubo. Por ejemplo, sabemos por testimonios orales que se dio en el «Batallón Elche», a raíz de la incorporación a los frentes de presos y después de que tres de ellos consiguieran acceder a las filas rebeldes. De manera que la cifra más aproximada de la represión de retaguardia en la provincia sería la de 942 víctimas.

2. En la represión de retaguardia, el «paseo» ocupa una lugar esencial con 654 casos (63,3%), por lo que requiere una especial atención que, en general, la historiografía de la guerra ha escatimado. Proponemos, pues, algunas reflexiones sobre el tema:

a) La terminología usada resulta claramente rechazable. Se ha utilizado con profusión el término terrorismo que es inaceptable para cualquier teórico de este fenómeno (32), al considerarse que dentro de una guerra no cable hablar de él. Por los demás, difícilmente puede compararse, por ejemplo, los atentados de ETA con lo que tuvo lugar en la retaguardia republicana entre agosto y diciembre de 1936. Quienes «pasean», más que defender a un estado democrático amenazado por un golpe militar lo que llevan a cabo es una pura venganza ante las muertes que comienzan a producirse en los frentes. Así, en la provincia los «paseos» se producen desde la segunda quincena del mes de agosto, es decir, una mes después del golpe. Las noticias publicadas en la prensa republicana, las charlas del general Queipo, las primeras bajas de los frentes... Todo ello creaba un ambiente propicio para perseguir e, incluso, asesinar a quienes se consideraban afines a los golpistas. Sencillamente,

(32) O'Sullivan, Noel (ed.): *Terrorismo, ideología y revolución*, Madrid, 1987. Aunque no hay referencias a España, este libro contiene importantes aportaciones teóricas al tema. Algunas de ellas fueron recogidas por la revista *Debats*, número 19, marzo 1987.

se contesta con la misma moneda al terror y al crimen generado en las zonas ocupadas por los sublevados.

No cabe hablar, pues, de terrorismo, pero sí de terror. Aunque éste no aparecía en los medios de comunicación —ni la prensa ni, suponemos, la radio mencionaban los «paseos»—, sí estaba en el ambiente y era perfectamente conocido por los ciudadanos. Es más, el «paseo» acaba convirtiéndose en un espectáculo público. Algunos testimonios recogidos así nos lo muestran: gentes que acuden a ver los cadáveres en las cunetas de las carreteras (por ejemplo, en Elche se les llegó a dar el macabro nombre de «toñinas»).

b) Un adjetivo que siempre se ha relacionado con los «paseos» es el de una represión espontánea. Y la espontaneidad es relativa. En el caso de la provincia, la represión ilegal surge al margen por completo de las autoridades provinciales y la prensa da buena muestra de ello. En «*El Día*» de Alicante puede leerse al respecto:

— 29-julio-1936. Bando del gobernador civil de Alicante, Francisco Valdés Casas amenazando con la ejecución inmediata de la máxima pena contra quienes realizaran actos contra la vida o las propiedades ajenas. Igualmente, contra las detenciones y registros sin el control de la autoridad, prohibición de llevar armas y solicitud a los Frentes Populares locales para que reprimieran desmanes y pillajes.

— 11-agosto-1936. El gobernador civil, de acuerdo con el Frente Popular envía telegramas a los alcaldes para que controlen carreteras y evitar así los desmanes de la gente armada.

— 29-agosto-1936. «*El Día*» recoge un manifiesto del departamento de Salud Pública del CEP valenciano en contra de la violencia al margen de la legalidad.

— 31-agosto-1936. El Comité de Orden Público del Frente Popular de Alicante lanza una proclama en contra de los desmanes. Igualmente, aparece un manifiesto de la CNT de Madrid contra la represión incontrolada.

— 12-septiembre-1936. Se publica un artículo de «*El Socialista*» sobre los «irresponsables» que ejecutan venganzas. Asimismo, se informa sobre el asesinato de Federico García Lorca.

— 17-octubre-1937. En un artículo sobre los Tribunales Populares se defiende que la represión debe llevarse a cabo sólo dentro de la legalidad.

Que tales actitudes no sirvieran de mucho no justifica que se minimicen o se oculten los indudables esfuerzos realizados sobre todo desde el Gobierno Civil, tal y como implícitamente se desprende de la lectura de la obra de Vicente Ramos. Téngase en cuenta, además, que en Alicante capital fue una

de las ciudades donde menos «paseos» hubo (18 frente a los 98 de Alcoy, 72 de Elche, 72 de Denia, o 72 de Orihuela), por lo que la actitud de Valdés Casas como máximo representante del gobierno en la provincia tuvo sus frutos.

De manera que podemos hablar de una represión espontánea, entendiendo con ello que surgió en las propias ciudades a pesar de la campaña descrita. Pero ¿ocurre lo mismo con las autoridades municipales?. Aquí es donde la espontaneidad es matizable. Naturalmente, la documentación conservada no ayuda a entender la cuestión. Ni en las actas de los Ayuntamientos, ni en las de los Frentes Populares locales o Comités Revolucionarios de Defensa se encuentra ninguna referencia. Por el contrario, puede hablarse de una inhibición de éstas frente a los «paseos». Puede discutirse si fueron decididos o no por las autoridades municipales, pero lo que no cabe duda es que, en general, no se hizo el más mínimo esfuerzo por evitarlos. Tan sólo en el Archivo Municipal de Elche hemos encontrado documentación acerca del papel del alcalde socialista Manuel Rodríguez en agosto de 1936, con numerosas órdenes de detención. En su inmensa mayoría los detenidos no sufrieron una muerte violenta.

Desde nuestro punto de vista, pues, puede hablarse más de inhibición y permisividad por parte de las autoridades municipales que de participación en la represión ilegal. Los «incontrolados» que ejecutan los «paseos» —otro lugar común en la historiografía— se hubieran podido neutralizar fácilmente si hubiera habido voluntad política para ello. De manera que puede aceptarse lo de incontrolados pero no lo de «incontrolables». Por lo demás, las plantillas de cafres de cada ciudad eran lo suficientemente exiguas como para que no fuera posible frenar sus acciones.

c) Sobre los ejecutores también debe decirse algunas cosas. Desde Brennan, los historiadores han insistido más en la responsabilidad de los anarquistas como máximos responsables de las ejecuciones ilegales, olvidando que la prensa anarquista fue la que con mayor rotundidad se opuso a los «paseos». Que los anarquistas participaron incluso generosamente en éstos lo prueba en la provincia el caso de Alcoy o el de Denia; pero en otros (Elche, Orihuela, Monóvar, etc.) bien poco tuvo que ver con éstos. Socialistas y, sobre todo, comunistas no quedaron al margen. Incluso, algunos testimonios nos permiten pensar en que muchos matones no tenían significación política alguna o eran simples advenedizos a cualquier sigla enrolados por mor de la guerra. Esto explicaría además que muchas muertes no se justifican por razones políticas. En cualquier ciudad se nos cuentan casos de asesinatos nunca entendidos (en ocasiones se nos han explicado muertes por el mal genio de las víctimas, por disputas en el trabajo, etc.).

Como fenómeno urbano, el «paseo» se da sólo en municipios a partir sobre todo de los 3.000 ó 4.000 habitantes. Creemos, además, que en pequeños municipios, cuando se produjeron asesinatos, éstos se debieron a gentes llegadas desde las ciudades próximas. En definitiva, se mata en las ciudades y desde ellas se marcha a matar a los pueblos.

CUADRO 1
REPRESIÓN DE GUERRA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE: PROCEDIMIENTOS

	ALCOY	ALICANTE	C. ENSARRIA	COSENTAINA	DENIA	DOLORES	ELCHE	JUJONA	MONÓVAR	NOVELDA	ORIHUELA	PEGO	VILLAJUYOSA	VILLENA	OTROS (1)	TOTALES	%
RETAGUARDIA																	
«Paseos»	98	18	13	31	72	56	72	40	52	20	72	20	11	13	66	654	63,31
«Sacos»		34	1				8								2	45	4,35
Fusilados T.P.A.	11	10		1		42	24	4	8	4	22				4	130	12,58
Fusilados fuera Prov. .	2	2						1			2				2	9	0,87
Paseados fuera Prov. .	7	10	1			9		8	3		3			2		43	4,16
«Santa Faz»	5	1												2		13	1,25
Linchamientos	1									2					5	3	0,29
enfrentamientos calle .	2														5	7	0,67
Cárceles	1	1		1			4	2			2					11	1,06
Hospitales		1					1								1	3	0,29
FRENTEROS																	
Frentes	3	2		8		5	36	4		1		1		2		62	6,00
Al cruzar líneas	2						4	3	3					1		13	1,25
OTROS																	
Suicidios		1						1								2	0,19
No consta	10		1	9		8	2		7		1					38	3,67
TOTALES	141	81	16	50	72	120	151	63	73	27	102	21	11	20	85	1.033	

FUENTE: Causa general.

(1) Víctimas citadas por municipios en los que no constaban como residentes.

CUADRO 2
REPRESIÓN DE GUERRA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE: CADENCIA

	ALCOY	ALICANTE	C. ENSARRIA	COCENTAINA	DENI	DOLORES	ELCHE	JUONA	MONÓVAR	NOVELDA	ORIHUELA	PEGO	VILLAJUYOSA	VILLENA	OTROS (1)	TOTALES	%
1936																	
VII		5					1	1	2		1					10	0,96
VIII		8		3	16	21	21		8	4	14	4	6	7	27	184	17,81
IX		3	5	2	22	47	23	10	22	10	16	9	5	2	26	234	22,65
X		17	6	27	15	14	37	15	17	3	10	7		1	9	192	18,58
XI		7	1	1	18	22	17	18	11	3	9			3	5	3	14,61
XII		3	1			3	1			3	45			2	2	60	5,80
1937																	
I		14	1		1		1	1	1					2		21	2,03
II		9	1							1						11	1,06
III		3	1				2				2					8	0,77
IV																	
V		4					1			1						6	0,58
VI		1														1	0,09
VII		1	1			2	19			2					4	29	2,80
VIII															1	1	0,09
IX		1														1	0,09
X		1								1						2	0,19
XI		1		3				1								5	0,48
XII		1												1		2	0,19

CUADRO 2 (Continuación)
 REPRESIÓN DE GUERRA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE: CADENCIA

	ALCOY	ALICANTE	C. ENSARRIÀ	COCENTAINA	DENIA	DOLORES	ELCHE	JIJONA	MONÓVAR	NOVELDA	ORIHUELA	PEGO	VILLAJUYOSA	VILLENA	OTROS (1)	TOTALES	%
1938																	
I				3			2									5	0,48
II						1										1	0,09
III				1												1	0,09
IV		1		2			1	1			1					6	0,58
V		1				1	1	4								7	0,67
VI							3	1	1		1	1			1	8	0,77
VII				1			2		3						2	8	0,77
VIII			1	1		1	1									4	0,38
XI				1			2	1								4	0,88
X		1														1	0,09
XI				1		1										2	0,19
XII														1		1	0,09
1939																	
I				1			2									3	0,29
II				1		1	3									5	0,48
III						1									1	2	0,19
No constan	12	2		2	72	5	11	7	7	27	3	21	11	20	7	56	5,42
TOTALES	141	81	16	50	72	120	151	63	73	27	102	21	11	20	85	1.033	

FUENTE: Causa general.

CUADRO 3
REPRESIÓN DE GUERRA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE: MILITANCIA POLÍTICA

	ALCOY	ALICANTE	C. ENSARRIÀ	COCENTAINA	DENIA	DOLORES	ELCHE	JIJONA	MONÓVAR	NOVELDA	ORIHUELA	PEGO	VILLAJUYOSA	VILLENA	OTROS (1)	TOTALES	%
F. E.	32	19		9	6	57	28	6	8	2	10			1	5	183	17,1
DRV, DRA, CEDA	18	3		25	27	1	58	4	20		2	12		9		179	17,3
Tradicionalistas	24	1		2	3	1	6			3	6					46	4,45
Renovación Esp.	1		1	2					1							5	0,48
Acción Pop., JAP		1	1			3	12	3	5	1						26	2,51
Acción Cat., Juv. C.		1			1		7		1		7		1			18	1,74
«Derechas»	1		5	2	19	52	11	27	11	12	49	4	7	3	7	210	20,32
Radicales	2			1	1		1	1	9		3					17	1,64
Izda. Republicana					1			1	1						1	4	0,38
«Izquierdas»					2						1	1	1		1	6	0,58
No consta. sin F.	63	56	9	9	12	6	28	22	17	9	24	4	2	7	71	339	32,81
TOTALES	141	81	16	50	72	120	151	63	73	27	102	21	11	20	85	1.033	

FUENTE: Causa general.

CUADRO 4

REPRESIÓN DE GUERRA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE: GRUPOS DE EDAD Y SEXO

	ALCOY	ALICANTE	C. ENSARRIÀ	COCENTAINA	DENIA	DOLORES	ELCHE	JUONA	MONÓVAR	NOVELDA	ORIHUELA	PEGO	VILLAJUYOSA	VILLENA	OTROS (1)	TOTALES	%
16-20	6	1		3	1	8	9	11	5		6			1	2	53	5,13
21-25	18	1		12	2	24	22	2	6	3	10				3	103	9,97
26-30	18	2		11	3	14	20	1	7	5	7	1		5	3	97	9,39
31-31	14		2	1	7	11	14	6	7	3	6	2		2	5	80	7,74
36-40	16		5	5	6	14	18	5	2		15		3	1	5	95	9,19
41-45	15	1	2	4	8	10	19	6	8	4	12	3		4	7	104	10,06
46-50	13		2		6	9	12	7	13	3	4	1	1	3	7	81	7,84
51-55	9	1		4	8	5	12	7	11	1	12	4	1	1	4	80	7,74
56-60	10		3	4	11	9	8	7	10	2	8	6	2	2	4	86	8,32
61-65	3			3	8	2	12	5	3	2	11	3	1		2	55	5,32
66-70	5		1	2	6	2	12	3		3	7		2		4	37	3,58
71-75	1		1				1	1		1	1			1	1	7	0,67
76-80																2	0,19
81-85																1	0,09
86-90																1	0,09
No consta	13	75		1	6	12	2	2	1			1				1	
Hombres	138	80	16	50	70	120	148	62	68	27	101	21	11	20	38	151	14,61
Mujeres	3	1			2		3	1	5		1				1	17	1,64
TOTALES	141	81	16	50	72	120	151	63	73	27	102	21	11	20	85	1.033	

FUENTE: Causa general.

CUADRO 5

REPRESIÓN DE GUERRA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE: PROFESIONES DE LAS VÍCTIMAS

	ALCOY	ALICANTE	C. ENSARRIA	COCENTAINA	DENIA	DOLORES	ELCHE	JUONA	MONÓVAR	NOVELDA	ORIHUELA	PEGO	VILLAJUYOSA	VILLENA	OTROS (1)	TOTALES	%
S. PRIMARIO																	
Campesinos	2	2	2	10	6	61	12	13	9	3	34	8		2	4	168	16,26
Pescadores, marinos		1				1	1									3	0,29
Propietarios		1	2	1	14	2	4	6	10	3	7	4	5	4	2	65	6,29
S. SECUNDARIO																	
Industriales	24	3		6	2	18	17	6	10	2	4		1	1	1	95	9,19
Trabajadores	10	3	1	12	8	22	40	13	17	3	6			2	4	141	13,64
S. TERCARIO																	
Sus labores	3	1					2		5		2					13	1,25
Sacerdotes, Relig.	20	2	7	9	16	3	6	7	4	7	30	6	1	2	10	130	12,5
Comerciantes	4	5	1		8	3	18	2	2	7	1			1	5	57	5,51
Abogados, jueces, notar.	9	4	1	7	7	1	4	2	5	2	6	1	4		3	56	5,42
Militares	21	16				1	2	3	1		5			1	1	51	4,93
Guardias civiles	2			2			2	1			2			2	5	16	1,54
Guard. Munic., Polic.	8	2				1	1		1		2				1	14	1,35
Estudiantes	11	11		3	3	3	3	3	3		2				1	43	4,16
Maestros		3			2	1	3				1				1	11	1,06
Médicos, Farmacéut.	5	1				1	6		3		1	1			3	18	1,74
Funcionarios	2				1	2	1	4	1		1	1				18	1,74
Ingenieros	1	1	2		1		2	1								6	0,58
Banqueros, Ag. Seg.	1						2	1							1	4	0,38
Empleados	10	4					21				1			5		41	3,96
Periodistas		1					1									2	0,19
Otros	1	1			1			1								4	0,38
No consta	)	19			3		3	1	1						43	77	7,45
TOTALES	141	81	16	50	72	120	151	63	73	27	102	21	11	20	85	1.033	

FUENTE: Causa general.

REPRESIÓN DE POSGUERRA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

FUSILADOS

Alicante (1939-1945)	597
Denia	49
Monóvar y Elda	21
Orihuela	18
Alcoy	17
Elche	15
Albatera (campo de concent)	8
Villena	7
Novelda	1
Petrel	1
Jijona	1
TOTAL	735

FUENTE: Registros Civiles y libros de registro de Cementerios.

REPRESIÓN DE POSGUERRA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

CADENCIA

	Fusilados	%
1939	273	37,55
1940	156	21,22
1941	176	23,94
1942	111	15,94
1943	13	1,76
1944	3	0,40
1945	2	0,27
No consta	1	
TOTAL	735	